

Gaceta de Puerto-Rico.

SE PUBLICA

Todos los días menos los domingos



SE SUSCRIBE

En la Imprenta de Gobierno—Fortaleza 21

PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO.

Año 1897

MARTES 14 DE DICIEMBRE

Número 296

Guía Oficial General

DE PUERTO-RICO

POR DON JOSÉ MARÍA GONZALEZ CONTRERAS,
letrado del Gobierno General y Director de la "Gaceta Oficial"

Contiene relación de cerca de seis mil empleados de la Isla en todos los ramos de la Administración, así civiles como militares y eclesiásticos, ya estén al servicio del Estado, de la Provincia ó del Municipio; noticia de todos los Centros, Corporaciones y oficinas, con su organización y funciones; reseña geográfica é histórica de la Isla, con descripción de todos los Términos municipales, sus habitantes, barrios, presupuestos, distancias kilométricas, Escuelas, etc. etc.

Este libro de mas de 600 páginas encuadrado á la rústica, se vende en la Administración de este PERIÓDICO OFICIAL, al precio de 2 pesos y 50 centavos.

PARTE OFICIAL

GOBIERNO GENERAL

DE LA

ISLA DE PUERTO-RICO

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 550 y con fecha 26 de Noviembre último, se me comunica la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:— Por la Presidencia del Consejo de Ministros se transcribe á este Ministerio el siguiente Decreto:— A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros, de acuerdo con el parecer de este.— En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino, Vengo en de retar lo siguiente:— Artículo 1º Los Gobernadores Generales de las Islas de Cuba y Puerto-Rico, quedan facultados para ejercer la gracia de indulto en todos aquellos casos en que á su juicio proceda, sin detrimento de la seguridad pública de los respectivos territorios que les están especialmente encomendados.— Esta facultad se entiende sin excepción de clase ni fuero, y será aplicable á todos sentenciados, procesados, rebeldes ó sujetos de cualquier modo á la jurisdicción ordinaria, á la de Guerra ó á la de Marina, por los delitos comprendidos en los Títulos 2º y 3º del libro 2º del Código penal en los Títulos 5º y 6º tratado 2º del Código de justicia militar, y en los Títulos 1º y 2º libro 2º del Código penal de la Marina de Guerra.—Art. 2º Las personas que por virtud de los procedimientos á que se refiere el artículo anterior estén detenidas, presas ó extinguiendo condena, serán puestas en libertad, y las que se hallen fuera del territorio español podrán volver libremente á él, cuando se les aplique el indulto. Si fueren súbditos extranjeros, serán entregados á los Cónsules de sus respectivos Gobiernos, con la expresa condición de salir del territorio español y de no volver á él sin autorización especial.—Art. 3º El Ministerio Fiscal cuando al efecto sea requerido por el Gobernador General desistirá inmediatamente de las acciones penales y de los procedimientos incoados por los delitos á que se refieren los artículos anteriores.—Art. 4º Los Tribunales y Jueces encargados de los procedimientos y de la ejecución de las sentencias respectivas cuando á ello sean requeridos por el Gobernador General, aplicarán sin dilación las disposiciones de este decreto.—Art. 5º Los Ministerios de la Guerra, de Marina y de Ultramar, en sus respectivos casos, resolverán sin ulterior recurso las dudas ó

reclamaciones á que pueda dar lugar el cumplimiento del presente decreto.—Art. 6º Los Gobernadores Generales de las Islas de Cuba y Puerto-Rico á quienes se conceden estas facultades darán cuenta al Gobierno del uso que de ella vayan haciendo.— Dado en Palacio á once de Noviembre de mil ochocientos noventa y siete.—MARÍA CRISTINA.—El Presidente del Consejo de Ministros, PRÁXEDES MATEO SAGASTA.— De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el de los Tribunales de ese territorio y demás efectos”.

Y puesto el cúmplase por mí con fecha de hoy, se publica en este “Periódico Oficial” para general conocimiento.

Puerto-Rico, 11 de Diciembre de 1897.

MARIN.

DECRETO.

Para dar cumplimiento á lo dispuesto en el Real Decreto de 12 de Noviembre último publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros, usando de las facultades que en el mismo se me otorgan y considerando que dada la cordura y lealtad de los habitantes de esta Isla puede desde luego aplicarse el generoso indulto concedido por S. M. sin detrimento de la seguridad pública he tenido á bien disponer lo siguiente:

Artículo 1º Concedo indulto total de las penas á que hubieran sido condenados á los reos de los delitos comprendidos en los títulos 1º, 2º y 3º del libro 2º del Código Penal ordinario en los títulos 5º y 6º del tratado 2º del Código de Justicia Militar y sus conexos y en los títulos 1º y 2º del Código penal de Marina.

Art. 2º Las personas que por virtud de los procedimientos á que se refiere el artículo anterior estén detenidas, presas en rebeldía ó extinguiendo condena, serán puestas en libertad y los que se hallen fuera de territo español podrán volver á él libremente si en el término de cuatro meses, contados desde esta fecha, solicitan acogerse á indulto, prometiendo ante los Cónsules del punto donde se encuentren fidelidad á España y las Constituciones.

Si fueran súbditos extranjeros se án entregados á los representantes de sus Gobiernos con la expresa condición de salir del territorio español y de no volver á él sin autorización especial.

Art. 3º El Ministerio Fiscal desistirá de las acciones penales en los procedimientos incoados ante la jurisdicción ordinaria por los delitos á que se refieren los artículos anteriores; y los que se siguen por la jurisdicción de Guerra, serán desde luego sobreesidos, á cuyo efecto los Jueces Instructores los remitirán al Excmo. Sr. Capitán General en el mas breve plazo posible consignando en su resúmen el estado en que se encuentran y el resultado de las diligencias que hayan practicado.

Art. 4º Los Jueces y Tribunales encargados de las causas y de la ejecución de las sentencias respectivas aplicarán sin dilación las disposiciones de este Decreto.

Art. 5º Quedarán sin efecto las gracias concedidas por este Decreto si reincidiesen los indultados. En este caso y aparte de la pena á que la reincidencia diese lugar se hará cumplir al reo siendo posible, la remitida

Puerto-Rico, 13 de Diciembre de 1897.

SABAS MARIN

SECRETARIA

Por la Presidencia del Consejo de Ministros con fecha 28 del mes próximo pasado, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General, la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—En la imposibilidad, por falta de

tiempo material, de trasladar á V. E. los Reales Decretos que con fecha 26, 27 y 28 del actual se insertan en la *Gaceta de Madrid*, relativos á la Constitución Autónoma Política, Administrativa de las Islas de Cuba y Puerto-Rico, remito á V. E. cinco ejemplares de cada una de las expresadas Gacetas, á fin de que surtan los efectos legales correspondientes interin se expidan los oportunos traslados de estas Reales disposiciones.—De Real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 12 del corriente, tanto á la presente disposición como á los Reales Decretos de referencia, de su orden superior se publica en este “Periódico oficial” para general conocimiento.

Puerto-Rico, 13 de Diciembre de 1897.—El Secretario del Gobierno General, Tomás Alonso.

EXPOSICIÓN

SEÑORA: En los momentos en que se dá á las islas de Cuba y Puerto-Rico una Constitución autonómica, que confía á sus propias iniciativas la dirección y el gobierno de los intereses locales, importa sobremanera afirmar la unidad constitucional, como base firmísima de la integridad del territorio.

Aspiración de todos los partidos liberales, satisfecha en principio en el decreto de 2 de Abril de 1881, no ha llegado, sin embargo, á realizarse en los términos á que tienen derecho los habitantes de las Antillas, que con frecuencia se quejan y lamentan de desigualdades irritantes que por sí solas bastan para entorpecer, cuando no para impedir por completo el uso de las libertades constitucionales. Estas, en efecto, tal como aparecen en el Código fundamental, son declaraciones de derechos y garantías que encuentran después su sanción y desenvolvimiento en una serie de leyes orgánicas, complementarias de la Constitución, como lo dice su mismo artículo 14, al confiar á las leyes especiales “las reglas que han de asegurar á los españoles el respeto recíproco de los derechos que aquélla les reconoce, determinando así mismo la responsabilidad civil y penal á que han de quedar sujetos, según los casos, los funcionarios de todas clases que atenten á los derechos enumerados en su título I.”

De suerte, que si por disposiciones arbitraria contra las cuales no cabe recurso, por penalidades impuestas, en los bandos de los Gobernadores generales ó por omisiones de leyes procesales, el ciudadano puede ser cohibido, vejado y hasta deportado á territorios lejanos, no le es posible ejercitar, ni el derecho de hablar, pensar y escribir, ni la libertad de enseñanza, ni la tolerancia religiosa, ni cabe practicar el derecho de reunión y el de Asociación.

Y sin embargo, en su ejercicio regular y tranquilo, se funda todo el derecho moderno, por lo cual donde quiera que se coarte, cesa la igualdad ante la ley, y con ésta desaparece la unidad constitucional, y se engendran aquellos torcidos sentimientos que llevan hasta atentar a la integridad del territorio. El lazo geográfico con todos los encantos y atractivos que ofrece, no puede hacer olvidar aquella otra aspiración más profunda y mas esencial, como que arranca de la misma naturaleza humana.

Es, pues, acto de buena política, y en todo caso acto de rigurosa justicia hacer cuanto esté en manos del Gobierno para que la Constitución se aplique desde ahora en toda su integridad en el territorio antillano, borrando las huellas de la desigualdad, y previniendo por una revisión completa de la legislación, que por confusiones ó errores, pueda haber españoles á quienes no alcance la acción protectora de las leyes.

No es seguramente otro el sentido del artículo 89 de la Constitución; su previsión al dejar á la elección de los Gobiernos el momento y la manera de aplicar las leyes á las islas de Cuba y Puerto-Rico, mas que autoriza, impone al Gobierno el deber de publicar este decreto en el momento mismo en el cual somete á la aprobación de V. M. aquella otra disposición que va á